



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 937/2022

**“CONTENEDORES HUGO SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por CONTENEDORES HUGO SA contra la Resolución de AFIP 2069-E-2021 en cuanto determinó la existencia de deuda por diferencias en las contribuciones ingresadas por los periodos 05/2014 a 04/2016 por un total de \$ 45.899.913,32, comprensivo de capital e intereses, y una multa de \$ 3.166.428,43 a valores de enero de 2022 por lo que se consideró un incorrecto encuadre de la rubrada en el Decreto 814/01 durante los periodos señalados.

La recurrente solicita la habilitación de la instancia judicial. Expresa que la imposición de efectuar el depósito previo constituye una limitación irrazonable y por ende una violación a su derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional. Ofrece a efectos de tener por cumplida la imposición legal constituir un seguro de caución dado lo elevado del monto reclamado.

En su memorial de agravios afirma ser una empresa dedicada a la recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos. En su opinión el organismo actuante equivoca el encuadre que pretende darle a su mandante pues en realidad CONTENEDORES HUGO SA debe ser caratulada como pequeña y mediana empresa según los términos de la autoridad de control -Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa- a fin de determinar las contribuciones patrimoniales que debe realizar al sistema previsional, por lo que, según entiende, cumplió adecuadamente con sus obligaciones.

A todo evento, y en el caso de no compartirse lo expresado, sostiene que no puede imponérsele un pago retroactivo ni tipificar lo actuado como infracción, aplicando una sanción patrimonial como se hizo.

Desde el punto de vista procesal entiendo que cabe tener por habilitada la instancia de revisión judicial.

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36169299#340773371#20230411110031714



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

La regla solve et repete se ha considerado congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, pero el citado imperativo legal ha sido atenuado en aquellos casos en que existe una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (CSJN 25/04/73 “Adolphia SA” Fallos 385:302; 02/08/05 “Centro de Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP- DGI”). Paralelamente, se ha admitido la validez de los seguros de caución como sucedáneo válido (conf. crit. esta Sala sent. del 15/03/02, “Cartocor SA c/AFIP -DGI”; Sala I, sent. 91.558 12/03/01 “Club Atlético Kimberley c/AFIP”; sala III, 25/04/01, “Compañía de Controles c/AFIP -DGI”; 17/03/17 “Arpenta Cambios SA c/AFIP”) siguiendo lineamientos de la CSJN (sent. 4/11/08, “Orígenes AFJP SA c/AFIP - DGI”, Fallos 331:2480) lo que justifica, a mi juicio, revisar lo decidido en la instancia administrativa a los fines de preservar las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18 de nuestra Carta Magna).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, entiendo que corresponde confirmar la resolución impugnada.

Ello por cuanto sobre la cuestión en debate, ya he fijado mi posición como vocal preopinante mediante sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2.013 recaída en la causa “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado en ocasión de pronunciarme al analizar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sentencia del 17/03/17, del registro de esta Sala.

La ley 24.467 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresa considerando tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad establezca un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería la encargada de evaluar el impacto que sobre las relaciones de trabajo tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts. 83 y 105 ley citada).

De lo anterior surge que la noción de pequeña y mediana empresa es móvil y fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 -ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa- cuyo objetivo sustancial es el fortalecimiento competitivo de dichas entidades estableciendo que la autoridad de aplicación será la encargada de definir las características de las empresas que serán consideradas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

micro, pequeñas y medianas. Entre sus tareas esta de la revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa, para actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art.1 ley citada).

Por otra parte y en cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó, en el área gubernamental de la Presidencia de la Nación, la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la mencionada ley 24.467, siendo la misma la encargada de determinar que empresas serían consideradas micro, pequeñas y medianas tomando como referencia las ventas totales anuales,debiendo diferenciar, además, según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del decreto 814/2001 (texto reformado por el art. 9º de la ley 25453) establece una alícuota del 20% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios excepto a los comprendidos en las leyes 23.551 -sindicatos-, 23.660 -obras sociales-, 23.661-entidades integrantes del sistema nacional de salud- y 24.467, es decir las pequeñas y medianas empresas para las cuales se estableció un porcentual inferior -16%-.

Estas directivas no tienen un valor absoluto pues, por disposición de la ley 25.414, se declaró la emergencia pública facultando al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y contributiva y, por ende, éste último pudo emitir el Decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en el art. 2º inc. a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos, que es precisamente lo que sucede con la apelante. En otras palabras que debería haber efectuado cotizaciones según el régimen general o normal.

La definición de pequeña y mediana empresa es, como ya he anticipado, mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha definición, pero exclusivamente a los fines laborales (art. 83 de la ley 24.467) y no fiscales ni contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25.414, por tratarse de una ley de emergencia pública.

No advierto, por otra parte, que la actuación del organismo de control haya sido irregular ya que, en nuestro ordenamiento jurídico, los entes administrativos tienen amplias facultades de control sobre los particulares con el objeto de verificar que efectúen, conforme a derecho, las cotizaciones al sistema de seguridad social con el objeto de asegurar los beneficios del sistema público instituido en favor de todos los habitantes de la Nación (ver arts. 14 bis de nuestra Carta Magna, 6º, 7º,10 y 11 de la ley 24.241).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

El referido sistema de control descansa sobre la base de las declaraciones formuladas por los contribuyentes que deben actuar como agentes de retención realizando aportes y contribuciones al sistema previsional y fiscal (arts. 12, ley 24.241 y 11, ley 11.683).

Lo anterior se traduce en el hecho que AFIP cuenta con facultades para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas y, en su caso, reclamar diferencias patrimoniales e, incluso, imponer sanciones en los supuestos en que el contribuyente que haya actuado con dolo o culpa.

En tal sentido se ha señalado que a fin de lograr el correcto funcionamiento del sistema, la ley requerirá obligatoriamente del empleador el suministro de información y la expedición de documentación o certificaciones que acrediten diversos hechos (Etala, Carlos A., “Derecho de la Seguridad Social”, p. 380, ed. Astrea) y, una vez que el empleador o responsable presenta su declaración jurada por las obligaciones previsionales a su cargo y por un período concreto, la Administración puede comprobar los datos que el propio sujeto pasivo ha suministrado, así como también investigar los hechos imponderables no declarados o los declarados parcialmente, en tanto cuenta con facultades para ello ((conf. ley 11.683, dto. 507/93 y Dto 618/97).

Cabe recordar que en nuestro ordenamiento jurídico es inexcusable el error de derecho (conf. art. 8 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación) por lo que la impugnante debió efectuar cotizaciones conforme alícuota prevista en el inciso a. del artículo 2º del Decreto 814/01 motivo por el cual la aplicación de la sanción patrimonial impuesta no resulta arbitraria.

Por lo expuesto propongo: 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial 2º) Confirmar la resolución recurrida 3º) Imponer las costas al apelante (art.68 CPCCN) 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$223.995) y 10 UMA (\$149.330) CSJN Ac. 09/2023 respectivamente, importes al que se agregará IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero a la propuesta de habilitación de instancia pero disiento en cuanto a la resolución de fondo del conflicto,

Respecto de las primeras de las cuestiones la impugnante acredita el pago del seguro de caución extendido por RUS, póliza N°115425 para lograr la habilitación de la instancia judicial.

Desde el punto de vista procesal entiendo que corresponde declarar habilitada la revisión judicial de lo actuado pues, si bien la regla solve et repete se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

ha considerado congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal ha sido atenuado admitiéndose la validez de presentación de seguros de caución (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP SA c/AFIP - DGI” Fallo 331:2480), situación que se configura en autos.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una sanción pecuniaria impuesta por el Estado en ejercicio de sus facultades de control.

La accionante se presenta e impugna el Acta de Inspección labrada bajo la orden de intervención N°1789920 en relación a los períodos 5/2013 a 3/2019 por la suma de \$15871035,63 en concepto de capital y de \$26382633,44 en concepto de intereses –calculados al 04/03/2021, y su Acta de Infracción por la suma de \$3166428,43.

En la causa se debate la aplicación de la alícuota establecida en el inciso b) del art. 2 del decreto 814/01 toda vez que el promedio de las ventas de los ejercicios considerados ha superado el importe de \$48.000.000.

Considera el recurrente que se observa una interpretación errónea y/o antojadiza del decreto con un fin meramente recaudatorio que no supera el standard de razonabilidad por cuanto es inimaginable en un contexto inflacionario creciente que luego de 20 años el monto de facturación para considerar PYME se mantenga invariable. Es por ello que solicita la actualización conforme las resoluciones SEPyme.

La AFIP sostiene que para ser considerado Pequeño o Mediano Contribuyente, debe ajustarse la facturación al monto máximo de \$48.000.000. Además analiza lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, el Decreto N° 1009/01, la Resolución General N° 1095/01 -

Afirma que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyme N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Señala que las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo, ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación.

Con ese fin, la Resolución SPyme N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividad (entre ellas, servicios y comercio), define el concepto de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

“ventas totales anuales”, establece parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos (que luego fueron elevados por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06).

Afirma que el concepto de PyME “a los efectos la determinación de la alícuota de contribuciones patronales” es el que surge del Decreto N°1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

En síntesis, sostiene, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

En consecuencia, visto las actuaciones administrativas, corresponde hacer la siguiente evaluación:

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013 , 357/2015 , 11/2016 ,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala I Expte 99680/2012/1/RH1 “Cooperativa Eléctrica Lujanense Ltda c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, Sala II Expte 19649/2020 “Guardian SRL c/ AFIP S/ Impugnacion de Deuda” sentencia del 14/11/2022, Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2, y el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reiteradamente ha dejado firme esta postura por aplicación sistemática del art. 280 CPCCN, ver Expte CSS 93739/2011/1/RH1 y Otros SOS SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sentencia del 12 de diciembre de 2017, entre otros).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformada por la ley 27430..Asimismo, la [Ley 27541](#) vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

Así lo señalado, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68 CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo” (voto del Dr. Carlos S. Fayt).(CSJN T. 315 , P. 1620)

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018).

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$3.733.250 –tres millones setecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos-(valor UMA 14.933 conf. Acordada 09/2023).

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA , equivalente a \$3.733.250 –tres millones setecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos-(conf. Acordada 09/2023) importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. del 16.06.03 Fallos 316:1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Juan Fantini Albarenque.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal por mayoría **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia, 2º) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 3º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA equivalente a \$3.733.250 -tres millones setecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos-(conf. Acordada 09/2023) importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder conforme C.S.J.N. “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. del 16.06.03 Fallos 316:1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423. Regístrese, protocolícese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36169299#340773371#20230411110031714



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

